



26/07 10A

C-212 | 13 - 11

Referenční číslo podání	: DC15812
Číslo souboru	: 1
Autor podání	: Alejandro Rubio González (R148752)
Datum podání	: 26/07/2013

Zapsáno do rejstříku podání
Soudního dvora pod číslem 941.300
V Lucemburku dne

29-07-2013

Fax / E-mail :
Podáno dne : 26-07-13
Vedoucí kanceláře
soudního dvora v.z.
Miroslav Aljšejev
Rada



MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

SECRETARÍA DE ESTADO
PARA LA UNIÓN EUROPEA

Abogacía del Estado ante el Tribunal
de Justicia de la Unión Europea

OBSERVACIONES DEL REINO DE ESPAÑA

EN EL ASUNTO C- 212/13

RYNEŠ

AL TRIBUNAL DE JUSTICIA

EL REINO DE ESPAÑA,

representado por D. Alejandro Rubio González, Abogado del Estado de la Abogacía del Estado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en calidad de Agente, habiendo aceptado que se le practiquen las notificaciones por e-Curia, al amparo del artículo 23 del Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, dentro del plazo que dicho precepto establece, procede a formular las siguientes **observaciones**:

ÍNDICE

I.- HECHOS	2
II.- CUESTIONES PREJUDICIALES PLANTEADAS	5
III.- MARCO JURÍDICO	6
III.1.- Derecho de la Unión Europea	5
III.2.- Derecho interno	7
IV.- OBSERVACIONES SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO	7
V.- RESPUESTA A LAS CUESTIONES PREJUDICIALES	15

I.- HECHOS

1. En octubre de 2007, el solicitante instaló un sistema de grabación en un hogar familiar propiedad exclusiva de su esposa. Esto tuvo lugar después de que unos desconocidos le atacasen reiteradamente a lo largo de varios años a él personalmente, a los miembros de su familia y, finalmente, a la vivienda de su esposa (rotura reiterada de ventanas entre 2005 y 2007). Los autores de los hechos nunca fueron identificados

2. El período más reciente en que el demandante operó el sistema de grabación fue entre el 5 de octubre de 2007 y el 11 de abril de 2008. No se discute que la única razón para hacerlo era la protección de la propiedad, la salud y la vida propias y de su familia. El sistema consistía en una sola cámara situada bajo los aleros del tejado. La cámara estaba instalada en una posición fija y no podía girar. Registraba la entrada de la vivienda de la esposa del demandante, la vía pública y la entrada a la vivienda opuesta. El sistema fue instalado por los empleados de una compañía de seguridad. Sólo permitía la grabación de imágenes, que se almacenaba en un equipo de grabación en forma de bucle continuo: la grabación se almacenaba continuamente en un disco duro y, cuando se agotaba la capacidad del disco, se grababa de nuevo por encima. El equipo de grabación no disponía de monitor alguno, de manera que no era posible examinar inmediatamente la película. Sólo el demandante tenía acceso directo al sistema y a sus datos. El hogar familiar lo utilizan solamente el demandante y su familia

3. En la noche del 6 al 7 de octubre de 2007 se produjo un nuevo ataque, cuando un disparo de catapulta rompió la ventana de la vivienda. Gracias al sistema de grabación fue posible identificar a dos sospechosos. Uno de ellos reclamó que se examinase la legitimidad de la operación del sistema de grabación del demandante: señaló que probablemente infringía la *Zákon č. 101/2000 Sb , o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (Ley n° 101/2000 sobre la protección de los datos personales y por la que se modifican diversas leyes)*.
 4. La Oficina para la Protección de Datos Personales mediante decisión de 4 de agosto de 2008, llegó a la conclusión de que el demandante había infringido el artículo 44, apartado 2, letras e), f) e i), de la Ley n° 101/2000. Para ello tuvo en cuenta los siguientes hechos:
 - i) Actuando en calidad de administrador de datos personales, el demandante obtuvo, mediante el sistema de grabación instalado en su hogar, datos personales de las personas que se desplazaban por la calle frente a la casa y que entraban en la vivienda situada al otro lado de la calle, sin su consentimiento.
 - ii) Asimismo, el demandante no informó a dichas personas sobre el tratamiento de los datos personales ni cumplió en modo alguno la obligación establecida en el artículo 11, apartado 1, de dicha Ley, es decir, la obligación del administrador de informar, al obtener datos personales, al interesado, en particular, acerca del alcance y la finalidad del tratamiento de los datos, por quién y por qué medios y quién tendrá acceso a los datos personales.
 - iii) Como administrador de datos personales, el demandante no había cumplido la obligación de información a la Oficina respecto al tratamiento, prevista en el artículo 16, apartado 1, de la Ley.
- Se impuso al demandante una multa de 1 500 CZK por dichas infracciones
5. El demandante interpuso recurso contra la decisión de la Oficina, pero el presidente de la misma confirmó la decisión, salvo en aspectos menores.
 6. El demandante presentó un recurso contencioso-administrativo contra la decisión del presidente de la Oficina, y el Tribunal Administrativo de Praga lo desestimó por infundado mediante sentencia de 25 de abril de 2012. En su motivación, dicho tribunal reprodujo punto por punto las conclusiones del presidente de la Oficina. Las grabaciones del sistema

instalado contenían información relativa a interesados identificables. Así, se podía identificar a las personas grabadas, por lo que los datos constituían datos personales en el sentido del artículo 4, letra a), de la Ley. Asimismo, declaró que no procedía inaplicar la Ley nº 101/2000 en virtud de la excepción prevista en su artículo 3, apartado 3 (tratamiento de datos personales para uso exclusivamente personal). El tribunal consideró que la grabación no estaba dirigida exclusivamente al uso personal del demandante, sino que estaba destinada a ser entregada a la policía y, en consecuencia, para su uso en procesos penales

7. El demandante recurrió en casación, dentro del plazo previsto, contra la sentencia del Tribunal Administrativo. En el recurso alegó, entre otros muchos argumentos, que su caso estaba comprendido dentro de la excepción prevista en el artículo 3, apartado 3, de la Ley nº 101/2000, con arreglo a la cual la Ley no se aplica al tratamiento de datos personales efectuado por una persona física para su uso exclusivamente personal. Asimismo, el demandante hace extensa referencia a los puntos de vista de la Oficina expresados en algunos de sus fundamentos. A este respecto, llama la atención sobre la incoherente aplicación e interpretación del concepto de «tratamiento de datos personales para uso personal» del artículo 3, apartado 3, de la Ley
8. El Tribunal Supremo Administrativo en sus deliberaciones preliminares, llegó a la conclusión de que el objeto de la controversia era, entre otros, la aplicabilidad de la Ley nº 101/2000 al caso del demandante, es decir, si comprende casos de registro de espacios públicos con el fin de proteger la propiedad y la salud. Por lo tanto, se trata de la interpretación del artículo 3, apartado 3, de la Ley, que transpone al Derecho nacional el artículo 3, apartado 2, de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.

II.- CUESTIONES PREJUDICIALES PLANTEADAS.

9. El órgano jurisdiccional remitente, el Tribunal Supremo Administrativo de la República Checa, ha planteado al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial, al amparo del artículo 267 del TFUE:

¿La operación de un sistema de grabación instalado en un hogar familiar a fin de proteger la propiedad, la salud y la vida de los propietarios del hogar puede ser calificada como tratamiento de datos personales «efectuado por una persona física en el ejercicio de actividades exclusivamente personales o domésticas» en el sentido del artículo 3, apartado 2, de la Directiva 95/46/CE (DO L 281, p 31), aunque dicho sistema registre también un espacio público?

III.- MARCO JURÍDICO

III.1.- Derecho de la Unión Europea.

10. La protección de los datos personales en el ámbito de la Unión se encuentra regulada en la **Directiva 95/46/CE** del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos¹ (en adelante, Directiva 95/46/CE).

11. La Directiva 95/46/CE señala en su Considerando 12º lo siguiente

“Considerando que los principios de la protección deben aplicarse a todos los tratamientos de datos personales cuando las actividades del responsable del tratamiento entren en el ámbito de aplicación del Derecho comunitario, que debe excluirse el tratamiento de datos efectuado por una persona física en el ejercicio de actividades exclusivamente personales o domésticas, como la correspondencia y la llevanza de un repertorio de direcciones”

12. El artículo 1 de la Directiva 95/46/CE regula el objeto de la misma y previene que

“1. Los Estados miembros garantizarán, con arreglo a las disposiciones de la presente Directiva, la protección de las libertades y de los derechos fundamentales de las personas

¹ DO L 281 de 23.11 1995, p 31/50. Modificada por el Reglamento (CE) nº 1882/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de septiembre de 2003 sobre la adaptación a la Decisión 1999/468/CE del Consejo de las disposiciones relativas a los comités que asisten a la Comisión en el ejercicio de sus competencias de ejecución previstas en los actos sujetos al procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado CE; DO L 284 de 31 10 2003, p. 1/53

físicas, y, en particular, del derecho a la intimidad, en lo que respecta al tratamiento de los datos personales

2. Los Estados miembros no podrán restringir ni prohibir la libre circulación de datos personales entre los Estados miembros por motivos relacionados con la protección garantizada en virtud del apartado 1”

13. El artículo 2 de la Directiva 95/46/CE contiene un catálogo de definiciones según el cual

“A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:

a) «datos personales» toda información sobre una persona física identificada o identificable (el «interesado»), se considerará identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un número de identificación o uno o varios elementos específicos, característicos de su identidad física, fisiológica, psíquica, económica, cultural o social,

b) «tratamiento de datos personales» («tratamiento») cualquier operación o conjunto de operaciones, efectuadas o no mediante procedimientos automatizados, y aplicadas a datos personales, como la recogida, registro, organización, conservación, elaboración o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma que facilite el acceso a los mismos, cotejo o interconexión, así como su bloqueo, supresión o destrucción,

[.]”.

14. Respecto del ámbito de aplicación, el apartado 1 del artículo 3 de la Directiva 95/46/CE indica que

“Las disposiciones de la presente Directiva se aplicarán al tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales, así como al tratamiento no automatizado de datos personales contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero”.

15. El artículo 3, apartado 2 de la Directiva 95/46/CE a su vez señala que

“Las disposiciones de la presente Directiva no se aplicarán al tratamiento de datos personales”.

— efectuado en el ejercicio de actividades no comprendidas en el ámbito de aplicación del Derecho comunitario, como las previstas por las disposiciones de los títulos V y VI del Tratado de la Unión Europea y, en cualquier caso, al tratamiento de datos que tenga por objeto la seguridad pública, la defensa, la seguridad del Estado (incluido el bienestar económico del Estado cuando dicho tratamiento esté relacionado con la seguridad del Estado) y las actividades del Estado en materia penal,

— efectuado por una persona física en el ejercicio de actividades exclusivamente personales o domésticas.”

16. De acuerdo con el artículo 6, apartado 1, letra c) de la Directiva 65/46/CE

“1 Los Estados miembros dispondrán que los datos personales sean.

[]

c) adecuados, pertinentes y no excesivos con relación a los fines para los que se recaben y para los que se traten posteriormente,

[]

17. Mediante el artículo 29 de la Directiva, se crea un Grupo de trabajo consultivo e independiente, compuesto, en particular, por representantes de las autoridades de protección de datos de los Estados miembros (en lo sucesivo, Grupo del artículo 29).

III.2.- Derecho interno

18. En aras de la brevedad, nos remitimos al auto de planteamiento.

IV.- OBSERVACIONES SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO

19. La cuestión planteada exige determinar el alcance de la excepción contenida en el artículo 3, apartado 2, segundo guión de la Directiva 95/46/CE. Si bien, desde el punto de vista formal, el órgano jurisdiccional remitente limite su petición a la interpretación de algunas de las disposiciones del Derecho de la Unión aplicables, tal circunstancia no impide que el Tribunal de Justicia le facilite todos los elementos de interpretación del Derecho la Unión

que puedan serle útiles para enjuiciar el asunto de que conoce con independencia de que ese órgano jurisdiccional haya hecho o no referencia a ellos en el enunciado de sus cuestiones². En este caso, el Reino de España considera necesario tener presente la regulación contenida en el artículo 2, letras a) y b); el artículo 3 apartado 1 y el artículo 6, apartado 1 letra c) de la Directiva 95/46/CE. De la misma manera, el Reino de España estima que las opiniones adoptadas por el Grupo del artículo 29 ofrecen análisis de gran utilidad para responder a la cuestión.

20. Con carácter preliminar debe determinarse si en el supuesto de grabación de imágenes, comprenda o no el mismo la vía pública, existe un tratamiento de datos de carácter personal, en el sentido establecido en la Directiva. Para poder dar una respuesta a esta cuestión es preciso examinar dos cuestiones. En primer lugar, hemos de determinar si las imágenes grabadas constituyen un dato de carácter personal. En segundo término, es preciso determinar si la grabación es efectivamente un tratamiento de esos datos de carácter personal.
21. Respecto del primer extremo, debe recordarse que el artículo 2, letra a) de la Directiva define los datos de carácter personal como *“toda información sobre una persona física identificada o identificable (el “interesado”); se considerará identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un número de identificación o uno o varios elementos específicos, característicos de su identidad física, fisiológica, psíquica, económica, cultural o social”*.
22. A este respecto la imagen de una persona tiene la consideración de dato de carácter personal puesto que la identifica unívocamente. Así, el Grupo del artículo 29 en su Dictamen 4/2007 sobre el concepto de datos personales (WP 136) señala que *“Las imágenes de personas obtenidas por medio de un sistema de videovigilancia pueden considerarse datos personales en la medida en que esas personas sean reconocibles”*³
23. Respecto del segundo extremo, es decir, la existencia de tratamiento, debe recordarse que la letra b) del artículo 2 los define como *“cualquier operación o conjunto de operaciones, efectuadas o no mediante procedimientos automatizados, y aplicadas a datos personales, como la recogida, registro, organización, conservación, elaboración o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra*

² Sentencia de 8 de noviembre de 2007, ING AUER (C-251/06, Rec 2007 p. I-9689), apartado 38

forma que facilite el acceso a los mismos, cotejo o interconexión, así como su bloqueo, supresión o destrucción". Por tanto, se trata de un concepto sumamente amplio en el que se subsume la recogida y grabación de las imágenes personales.

24. Una vez que se ha determinado que la grabación de imágenes constituye un tratamiento de datos de carácter personal, es preciso analizar si un supuesto como el planteado encajaría en la exclusión prevista en el artículo 3, apartado 2 de la Directiva 95/46/CE. A tal efecto, resulta conveniente tomar en consideración los distintos supuestos en los que se ha examinado la aplicación de dicha norma.

25. Como señala el Tribunal remitente, el considerando 12º de la Directiva 95/46/CE se limita a indicar en su segunda frase que *"debe excluirse el tratamiento de datos efectuado por una persona física en el ejercicio de actividades exclusivamente personales o domésticas, como la correspondencia y la llevanza de un repertorio de direcciones"*. Pese a su parquedad, el texto reproducido introduce un primer criterio de aproximación a la excepción que ha sido tomado en cuenta por el Tribunal de Justicia. Así, en la sentencia Lindqvist se indica lo siguiente:

"46 En cuanto a la excepción prevista en el segundo guión del artículo 3, apartado 2, de la Directiva 95/46, en el duodécimo considerando de esta última, relativo a dicha excepción, se citan como ejemplos de tratamiento de datos efectuado por una persona física en el ejercicio de actividades exclusivamente personales o domésticas la correspondencia y la llevanza de un repertorio de direcciones

47 En consecuencia, esta excepción debe interpretarse en el sentido de que contempla únicamente las actividades que se inscriben en el marco de la vida privada o familiar de los particulares, evidentemente, no es éste el caso de un tratamiento de datos personales consistente en la difusión de dichos datos por Internet de modo que resulten accesibles a un grupo indeterminado de personas

*48 Por tanto, procede responder a la tercera cuestión que un tratamiento de datos personales como el descrito en la respuesta a la primera cuestión no está comprendido en ninguna de las excepciones que figuran en el artículo 3, apartado 2, de la Directiva 95/46"*⁴

³ Dictamen 4/2007 sobre el concepto de datos personales, adoptado el 20 de junio (WP 136), página 8

⁴ Sentencia de 6 de noviembre de 2003, Lindqvist (C-101/01, Rec 2003 p. I-12971), apartado 46 a 48

26. Se delimita así un primer elemento que permite analizar el alcance de esta norma, por cuanto se considera que la referencia a “actividades exclusivamente personales o domésticas” ha de entenderse referida a “las actividades que se inscriben en el marco de la vida privada o familiar”.
27. Este criterio es nuevamente sostenido por el Tribunal en la Sentencia Satamedia⁵, cuyos apartados 43 a 45 reproducen el razonamiento sostenido en la sentencia Lindqvist, indicando que manifiestamente no encajan en la excepción las actividades de Markkinapörssi y Satamedia, que tienen por objeto poner los datos recogidos en conocimiento de un número indefinido de personas
28. De ambas sentencias se desprende un segundo elemento a tomar en consideración a la hora de delimitar el alcance de la excepción prevista en la Directiva para las actividades personales o domésticas o relacionadas con la vida privada y familiar de las personas. Este elemento consiste en que no podrán entenderse comprendidos en la excepción los supuestos en los que la información tratada sea puesta en conocimiento de un número “indeterminado” o “indefinido” de personas
29. Estas conclusiones, han sido tomadas en consideración por el Grupo del artículo 29, en particular en su Dictamen 5/2009 sobre las redes sociales en línea, que analiza la posición jurídica de los usuarios de las redes sociales y la aplicabilidad de la Directiva a las actividades que los mismos realizan⁶. Este documento parte del principio general de que *“en la mayoría de los casos, los usuarios se consideran personas interesadas”* y que *“la Directiva no impone las obligaciones de un responsable del tratamiento de datos a una persona que trata datos personales «en el ejercicio de actividades exclusivamente personales o domésticas»”*
30. No obstante, a los efectos que aquí interesan, resulta relevante el análisis efectuado por el Grupo cuando añade a la conclusión preliminar indicada que *“en algunos casos, la exención doméstica puede no cubrir las actividades de un usuario de SRS⁷ y puede entonces considerarse que el usuario ha asumido algunas de las responsabilidades de un responsable de datos”*, haciendo referencia a tres supuestos concretos a título de ejemplos.

⁵ Sentencia de 16 de diciembre de 2008, Satakunnan Markkinapörssi y Satamedia (C-73/07, Rec 2008 p. I-9831)

⁶ Dictamen 5/2009 sobre las redes sociales en línea, adoptado el 12 de junio de 2009 (WP 163), apartado 3 1, páginas 6 y 7

⁷ Servicio de red social

31. Así, en primer lugar, se plantea la aplicabilidad de la Directiva en atención a la naturaleza y objeto del tratamiento llevado a cabo por el usuario en los supuestos en los que su actividad puede superar la puramente personal o doméstica, indicando que *“si un usuario de SRS actúa en nombre de una empresa o de una asociación o utiliza el SRS principalmente como una plataforma con fines comerciales, políticos o sociales, la exención no se aplica. En este caso, el usuario asume la plena responsabilidad de un responsable del tratamiento de datos que revela datos personales a otro responsable del tratamiento de datos (SRS) y a terceros (otros usuarios de SRS o incluso, potencialmente, a otros responsables del tratamiento de datos que tienen acceso a ellos”*
32. En segundo lugar, el Grupo considera que la excepción no operaría atendiendo a la propia configuración del acceso al perfil del usuario, mencionando los supuestos de redes sociales abiertas o *“cuando pueda alegarse que la aceptación de contactos no es objeto de una selección, es decir, si los usuarios aceptan “contactos” sin preocuparse de la relación que les une”*, siguiendo así un criterio similar al mantenido por el Tribunal en las sentencias Lindqvist y Satamedia antes citadas, entendiendo que *“si un usuario decide, con perfecto conocimiento de causa, ampliar el acceso más allá de los “amigos” elegidos, asume las responsabilidades de un responsable del tratamiento de datos”*, aplicándose así *“el mismo régimen jurídico que cuando una persona utiliza otras plataformas tecnológicas para publicar datos personales en Internet”*, en términos similares a los que se deducen de las citadas sentencias
33. Por último, el Grupo se refiere a un tercer supuesto en que considera que *“la aplicación de la exención doméstica se ve también limitada por la necesidad de garantizar los derechos de los terceros, especialmente por lo que se refiere a los datos sensibles”*.
34. Si los dos primeros supuestos enumerados no hacen sino recalcar los derivados de la legislación y jurisprudencia citadas con anterioridad, este tercer supuesto añade un nuevo factor que ha de ser tenido en cuenta a la hora de analizar la aplicabilidad o no de la excepción doméstica a un tratamiento de datos concreto: la afectación que dicho tratamiento puede producir en los derechos de terceros que son precisamente objeto de protección por la Directiva 95/46/CE a tenor de su artículo 1 1.
35. De este modo, la aplicabilidad de la regla contenida en segundo guión del artículo 3 2 de la Directiva se encontraría entroncada con el principio de proporcionalidad que la misma

consagra a lo largo de su articulado, particularmente en el artículo 6.1 c), que consagra que *“Los Estados miembros dispondrán que los datos personales sean (.) adecuados, pertinentes y no excesivos con relación a los fines para los que se recaben y para los que se traten posteriormente”*. Por ello, será preciso en cada caso concreto valorar si, atendidas sus circunstancias, el posible tratamiento de datos de terceros puede resultar adecuado a la actividad personal o doméstica, o en términos del Tribunal de Justicia, *“privada y familiar”* de las personas sin que ello menoscabe los derechos de las personas cuyos datos sean objeto de tratamiento y, en particular sus derechos a la intimidad y la protección de datos de carácter personal, consagrados por los artículos 7 y 8 de la Carta de Derechos Fundamentales

36. De todo lo hasta aquí indicado se desprende que para analizar si un determinado tratamiento se encuentra incluido en la excepción establecida en el segundo guión del artículo 3.2 de la Directiva habrán de tenerse en cuenta tres factores esenciales:

- Si el tratamiento está relacionado con actividades encuadradas en la vida privada y familiar de las personas;
- Si los datos van a ser objeto de difusión a un número indeterminado o indefinido de destinatarios; y
- Si el tratamiento de los datos no perjudica los derechos y libertades fundamentales de terceros.

37. En efecto, tomando en cuenta el primero de los elementos, la existencia de una normativa de protección de datos de carácter personal no debe suponer una intromisión en las relaciones privadas, familiares o de amistad de las personas. Extender su aplicación a esos ámbitos propios de la vida privada podría suponer una desnaturalización de las relaciones sociales, que quedarían sometidas a unos requisitos en absoluto concordantes con las mismas. La protección de los datos personales no debería alcanzar la esfera más íntima y personal de las relaciones entre las personas.

38. Pero, al propio tiempo, esta exclusión debería a su vez exceptuarse en aquellos casos en los que el tratamiento de estos datos pueda lesionar los derechos e intereses de las personas, que al menos deberían tener derecho a oponerse a que el mismo se lleve a cabo. A tal efecto, debe tenerse en cuenta que la utilización de las tecnologías de la información y las

comunicaciones puede dar lugar a que un tratamiento de los datos inicialmente vinculado con la vida privada de quien lo realiza pueda implicar un acceso a información de un tercero que éste no desea que sea del dominio público, al poder causarle un perjuicio a su privacidad o incluso generarle un perjuicio indemnizable. La utilización de la exclusión a la que viene haciéndose referencia no debería amparar este tipo de situaciones

39. Sentadas estas premisas debe procederse a dar respuesta a la cuestión planteada, lo que implica aplicar al tratamiento efectuado los factores que se han enumerado con anterioridad. Como se ha señalado, en el presente caso, la recogida de imágenes se efectuaba con la finalidad de proteger la vida y la seguridad de las personas que se encuentran en la vivienda en que residía la persona sancionada por la autoridad checa de protección de datos, captando no sólo la entrada de dicha vivienda y sus zonas aledañas, sino también la vía pública en toda su extensión, hasta el punto de que se captaban igualmente imágenes de las personas que accedían a la vivienda situada al otro lado de la calle en que se encontraba aquélla cuya seguridad se pretendía preservar
40. El acceso a las imágenes quedaba limitado al denunciante, sin perjuicio de que las mismas pudieran ser, como de hecho lo fueron, facilitadas a la policía en caso de que se detectase la realización de una conducta que perjudicase la vida, integridad o seguridad de quienes se encontraban en la residencia.
41. En cuanto al alcance de la difusión de las imágenes, el criterio que parecía regir el tratamiento al que se está haciendo referencia era el que las mismas no fueran objeto de comunicación a terceros más que a las fuerzas de seguridad en caso de que se detectase la comisión de un acto ilícito en la vivienda del denunciante, por lo que cabría considerar cumplido el hecho de que los datos no serían objeto de revelación a una pluralidad indeterminada o indefinida de personas, sin perjuicio de que el destinatario de las imágenes sí tendría la condición de responsable del tratamiento con arreglo a las definiciones establecidas en la misma, aun cuando la Directiva pudiera no serle de aplicación en virtud de la exclusión establecida por el primer guión del artículo 3.2.
42. El problema concurre, sin embargo, en relación con los dos factores restantes que han de ser tomados en consideración, habida cuenta del hecho de que las cámaras no se limitaban a cubrir la vivienda del responsable ni la parte mínima indispensable que pudiera ser

adyacente a la misma, sino que las imágenes incluyen la vía pública adyacente hasta el extremo de llegar a grabar la entrada de la vivienda situada al otro lado de la calle

43. Si la grabación se hubiera limitado al interior de la vivienda los datos obtenidos podrían entenderse relacionados con la vida privada y familiar de las personas que la ocupan, incluso con independencia de que las mismas fuesen empleadas con fines de preservación de la seguridad. En estos supuestos cabría considerar que el derecho del responsable a preservar su seguridad unido a la limitación el alcance de las grabaciones a su propio hogar prevalecería en todo caso sobre los derechos de los terceros que pudieran llegar a penetrar en esa vivienda.
44. Sin embargo, cuando las imágenes cubren áreas que se encuentran fuera de los confines de la vivienda cuya seguridad se pretende, ha de considerarse que es mayor la injerencia en la privacidad de las personas cuya imagen es captada por las cámaras, sin que quepa necesariamente ponderar como prevalente el derecho del titular de la vivienda. Es decir, al no limitarse la grabación al marco privado y familiar de quien es responsable de la grabación cobra más importancia el hecho de que no existan derechos de terceros que puedan considerarse violentados como consecuencia de la grabación, especialmente teniendo en cuenta que los mismos no son informados en modo alguno acerca del hecho de que su imagen está siendo objeto de grabación y que estos terceros no guardan, en general, relación con el titular de la vivienda vigilada.
45. Es en este punto donde adquiere especial relevancia el principio de proporcionalidad consagrado por el artículo 6.1 c) de la Directiva, por cuanto la injerencia deberá considerarse mayor cuanto menos vinculada al fin de protección de la propia vivienda sea la imagen grabada; es decir, los datos dejarán en ese caso de ser adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con la finalidad perseguida, excediendo la grabación de la excepción del artículo 3.2 de la Directiva y siendo preciso que el responsable cumpla con las obligaciones que la misma impone a cualquier responsable del tratamiento.
46. En el caso objeto de la cuestión prejudicial, la cámara no sólo capta la parte de vía pública que pudiera ser imprescindible o mínima para proteger la entrada de la vivienda, sino que la capta en toda su extensión, al menos en cuanto dista de la vivienda situada enfrente de la suya. En ese caso, el tratamiento ha de reputarse desproporcionado para la finalidad perseguida, debiendo atenderse especialmente a los derechos de las terceras personas cuya

imagen es objeto de grabación, al incrementarse exponencialmente su número y disminuir en la misma proporción la vinculación de dichas personas con el objeto de la videovigilancia.

47. Por este motivo, debería concluirse que la excepción doméstica prevista en la Directiva sería de aplicación en los supuestos en los que el campo de grabación de las imágenes se limitase a la propia vivienda cuya seguridad se pretende o, a lo sumo, a la parte de vía pública mínima indispensable para proteger los accesos a dicha vivienda.

V.- RESPUESTA A LAS CUESTIONES PREJUDICIALES.

48. A la vista de todos los argumentos expuestos, el Reino de España propone al Tribunal de Justicia que responda a la cuestión prejudicial en los siguientes términos:

La operación de un sistema de grabación instalado en un hogar familiar a fin de proteger la propiedad, la salud y la vida de los propietarios del hogar puede ser calificada como tratamiento de datos personales «efectuado por una persona física en el ejercicio de actividades exclusivamente personales o domésticas» en el sentido del artículo 3, apartado 2, de la Directiva 95/46/CE, cuando el campo de grabación quede limitado al propio hogar familiar o a los espacios públicos mínimos imprescindibles para proteger sus accesos, aun cuando las imágenes pudieran ser objeto de comunicación a las fuerzas de seguridad en caso de detectar se un peligro para la vida, la seguridad y la salud de los propietarios.

Madrid, a 26 de julio de 2013

EL AGENTE DEL REINO DE ESPAÑA

Alejandro Rubio

Fdo. Alejandro Rubio González



Vyjádření Španělského království

Věc C-212/13*

Písemnost předložená:

Španělským královstvím

Název věci:

RYNEŠ

Datum doručení:

26. července 2013

ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ

zastoupené Alejandrem Rubio Gonzálezem, Abogado del Estado z Abogacía del Estado před Soudním dvorem Evropské unie, jakožto zmocněncem, které souhlasí s doručováním prostřednictvím e-Curia, předkládá na základě článku 23 protokolu o statutu Soudního dvora Evropské unie, ve lhůtě stanovené uvedeným ustanovením, následující **vyjádření**:

OBSAH

- I. SKUTKOVÉ OKOLNOSTI I
- II. POLOŽENÉ PŘEDBĚŽNÉ OTÁZKY 3
- III. PRÁVNÍ RÁMEC 3
 - III.1. Právo Evropské unie 3
 - III.2. Vnitrostátní právo 5
- IV. VYJÁDŘENÍ K MERITU VĚCI 5
- V. ODPOVĚĎ NA PŘEDBĚŽNOU OTÁZKU 11

SKUTKOVÉ OKOLNOSTI

Žalobce v říjnu 2007 nainstaloval na rodinný dům ve výlučném vlastnictví své manželky kamerový systém. Stalo se tak poté, co neznámé osoby několik let opakovaně útočily na něj osobně, na členy jeho rodiny a posléze na dům ve

* Jednací jazyk: čeština.

vlastnictví jeho manželky (několikrát rozbitá okna od roku 2005 do roku 2007). Pachatele se nikdy nepodařilo vypátrat.

Žalobce provozoval kamerový systém v období nejpozději od 5. října 2007 do 11. dubna 2008. Je nesporné, že jediným důvodem byla ochrana majetku, zdraví a života žalobce a jeho rodiny. Kamerový systém se skládal z jedné kamery, umístěné pod římsou střechy. Kamera byla napevno zabudovaná, bez možnosti otáčení. Kamera snímala vstup do domu žalobcovy manželky, veřejnou ulici a vstup do protějšího domu. Kamerový systém byl zabudován pracovníky bezpečnostní firmy. Systém umožňoval jen obrazový záznam, který byl ukládán do nahrávacího zařízení formou nekonečné smyčky: záznam se průběžně nahrává na harddisk a při naplnění jeho kapacity se opětovně přemazává novým záznamem. U nahrávacího zařízení není instalován monitor, takže si obraz nelze bezprostředně prohlížet. K systému a jeho datům měl přímý přístup jen žalobce. Rodinný dům užívá žalobce a jeho rodina.

V noci ze 6. na 7. října 2007 došlo k dalšímu útoku, totiž k rozbití okna rodinného domu výstřelem z praku. Díky kamerovému systému se podařilo identifikovat dvě podezřelé osoby. Jeden z podezřelých podal podnět k prověření provozu kamerového systému žalobce. Upozornil, že provoz systému asi porušuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

Úřad pro ochranu osobních údajů v rozhodnutí ze dne 4. srpna 2008 dospěl k závěru, že žalobce spáchal přestupky podle § 44 odst. 2 písm. e), f) a i) zákona č. 101/2000 Sb. Těch se dopustil tím, že

- i) jako správce osobních údajů shromažďoval prostřednictvím kamerového systému instalovaného na svém domě osobní údaje osob pohybujících se po ulici před domem a vstupujících do domu na druhé straně ulice, a to bez jejich souhlasu,
- ii) dále tyto osoby o tomto zpracování osobních údajů nijak neinformoval a ani jiným způsobem nesplnil povinnost stanovenou v § 11 odst. 1 téhož zákona, tedy povinnost správce při shromažďování osobních údajů informovat subjekt údajů mj. o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou osobní údaje zpracovávány, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat a komu mohou být osobní údaje zpřístupněny,
- iii) jako správce osobních údajů nesplnil oznamovací povinnost o tomto zpracování vůči Úřadu podle § 16 odst. 1 téhož zákona.

Za to byla žalobci uložena pokuta ve výši 1 500 Kč.

Žalobce podal proti rozhodnutí Úřadu rozklad. Předseda Úřadu však uvedené rozhodnutí s výhradou drobného upřesnění potvrdil.

Žalobce napadl rozhodnutí předsedy Úřadu žalobou. Městský soud v Praze svým rozsudkem ze dne 25. dubna 2012 žalobu jako nedůvodnou zamítl. Ve svém odůvodnění se plně ztotožnil se závěry předsedy Úřadu. Záznamy z instalovaného kamerového systému obsahují informace týkající se určitelných subjektů údajů. Dochází tak ke ztotožnění zaznamenaných osob, a jedná se tedy o osobní údaje dle § 4 písm. a) zákona. Dále uvedl, že o výjimku z aplikace zákona č. 101/2000 Sb. dle § 3 odst. 3 (zpracování osobních údajů výlučně pro vlastní potřebu) se jednat nemůže. Záznam totiž dle soudu neměl sloužit pro výlučně osobní potřebu žalobce, ale měl být naopak předán policejním orgánům a následně využit v trestním řízení.

Žalobce napadl rozsudek městského soudu včas podanou kasační stížností. V ní kromě mnoha dalších argumentů namítá, že na jeho případ dopadá výjimka dle § 3 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb. Podle ní se zákon nevztahuje na zpracování osobních údajů, které provádí fyzická osoba výlučně pro osobní potřebu. Žalobce dále obsáhle cituje názory Úřadu prezentované v několika jeho materiálech. Těmi poukazuje na rozpornou aplikaci a výklad pojmu „zpracování osobních údajů pro osobní potřebu“ dle § 3 odst. 3 zákona.

Nejvyšší správní soud dospěl při předběžné poradě k závěru, že předmětem sporu je mimo jiné použitelnost zákona č. 101/2000 Sb. na žalobcovu věc, tj. zda dopadá na případy monitorování veřejného prostranství za účelem ochrany majetku a zdraví. Sporným je tedy výklad § 3 odst. 3 zákona, který na vnitrostátní úrovni provádí čl. 3 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

POLOŽENÉ PŘEDBĚŽNÉ OTÁZKY

Předkládající soud, Nejvyšší správní soud České republiky, položil v rámci článku 267 SFEU Soudnímu dvoru následující předběžnou otázku:

Lze provozování kamerového systému umístěného na rodinném domě za účelem ochrany majetku, zdraví a života majitelů domu podřadit pod zpracování osobních údajů „prováděné fyzickou osobou pro výkon výlučně osobních či domácích činností“ ve smyslu čl. 3 odst. 2 směrnice 95/46/ES (Úř. věst. L 281, s. 31; Zvl. vydání 13/015, s. 355), třebaže takovýto systém zabírá též veřejné prostranství?

PRÁVNÍ RÁMEC

III.1. Právo Evropské unie

Ochranu osobních údajů v rámci Unie upravuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů¹ (dále jen „směrnice 95/46/ES“).

Směrnice 95/46/ES uvádí v bodě 12 odůvodnění toto:

„vzhledem k tomu, že zásady ochrany se musí vztahovat na veškerá zpracování osobních údajů kteroukoli osobou, jejíž činnosti spadají do oblasti působnosti práva Společenství; že je třeba vyloučit zpracování údajů fyzickou osobou při výkonu činností, které mají výlučně osobní povahu, jako je korespondence nebo vedení adresáře“

Článek 1 směrnice 95/46/ES upravuje předmět směrnice a stanoví:

„1. Členské státy zajišťují v souladu s touto směrnicí ochranu základních práv a svobod fyzických osob, zejména jejich soukromí, v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

2. Členské státy nemohou omezit ani zakázat volný pohyb osobních údajů mezi členskými státy z důvodů ochrany zajištěné podle odstavce 1.“

Článek 2 směrnice 95/46/ES obsahuje seznam definic, podle něhož:

„Pro účely této směrnice se rozumí:

„osobními údaji“ veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné osobě (subjekt údajů); identifikovatelnou osobou se rozumí osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména s odkazem na identifikační číslo nebo na jeden či více zvláštních prvků její fyzické, fyziologické, psychické, ekonomické, kulturní nebo sociální identity;

„zpracováním osobních údajů“ („zpracování“) jakýkoli úkon nebo soubor úkonů s osobními údaji, které jsou prováděny pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromažďování, zaznamenávání, uspořádávání, uchovávání, přizpůsobování nebo pozměňování, vyhledávání, konzultace, použití, sdělení prostřednictvím přenosu, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, srovnání či kombinování, jakož i blokování, výmaz nebo likvidace;

[...]“

Pokud jde o oblast působnosti, čl. 3 odst. 1 směrnice 95/46/ES stanoví:

¹ – Úř. věst L 281, s. 31. Pozměněná nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 ze dne 29. září 2003 o přizpůsobení ustanovení týkajících se výborů, které jsou nápomocny Komisi při výkonu jejich prováděcích pravomocí, stanovených v právních aktech Rady přijatých postupem podle článku 251 Smlouvy o ES, ustanovením rozhodnutí 1999/468/ES (Úř. věst. L 284, s. 1).

„Tato směrnice se vztahuje na zcela nebo částečně automatizované zpracování osobních údajů, jakož i na neautomatizované zpracování osobních údajů, které jsou obsaženy v rejstříku nebo do něj mají být zařazeny.“

Článek 3 odst. 2 směrnice 95/46/ES stanoví:

„Tato směrnice se nevztahuje na zpracování osobních údajů:

- prováděné pro výkon činností, které nespádají do oblasti působnosti práva Společenství a jsou uvedeny v hlavě V a VI Smlouvy o Evropské unii, a v každém případě na zpracování, které se týká veřejné bezpečnosti, obrany, bezpečnosti státu (včetně hospodářské stability státu, pokud jsou tato zpracování spojená s otázkami bezpečnosti státu) a činnosti státu v oblasti trestního práva,
- prováděné fyzickou osobou pro výkon výlučně osobních či domácích činností.“

Podle čl. 6 odst. 1 písm. c) směrnice 95/46/ES:

„1. Členské státy stanoví, že osobní údaje musejí být:

[...]

c) přiměřené, podstatné a nepřesahující míru s ohledem na účely, pro které jsou shromažďovány a/nebo dále zpracovávány;

[...]“

Článkem 29 směrnice se zřizuje poradní a nezávislá pracovní skupina, která je tvořena zejména zástupci orgánů členských států pro ochranu údajů (dále jen „skupina zřízená podle článku 29“ nebo „skupina“).

III.2. Vnitrostátní právo

V zájmu stručnosti odkazujeme na předkládací usnesení.

VYJÁDŘENÍ K MERITU VĚCI

Položená otázka vyžaduje určení rozsahu výjimky obsažené v čl. 3 odst. 2 druhé odrážce směrnice 95/46/ES. Ačkoliv z formálního hlediska se předkládající soud ve své žádosti omezuje na výklad některých použitelných ustanovení unijního práva, tato okolnost Soudnímu dvoru nebrání, aby předkládajícímu soudu poskytl všechny prvky výkladu unijního práva, které mohou být užitečné pro rozhodnutí ve věci, která mu byla předložena, bez ohledu na to, zda tento soud tento výklad

ve svých otázkách zmínil². V tomto případě má Španělské království za to, že je nezbytné mít na zřeteli úpravu obsaženou v čl. 2 písm. a) a b), čl. 3 odst. 1 a čl. 6 odst. 1 písm. c) směrnice 95/46/ES. Španělské království se rovněž domnívá, že stanoviska přijatá skupinou zřízenou podle článku 29 nabízejí analýzu, která je pro zodpovězení otázky velmi přínosná.

Nejprve je třeba určit, zda v případě obrazového záznamu, bez ohledu na to, zda zahrnuje veřejnou ulici či nikoliv, jde o zpracování osobních údajů ve smyslu stanoveném ve směrnici. K zodpovězení této otázky je nutno přezkoumat dvě otázky. Zaprvé je třeba určit, zda pořízené obrazové záznamy představují osobní údaj. Zadruhé je třeba určit, zda záznam je skutečně zpracováním těchto osobních údajů.

Pokud jde o první otázku, je třeba připomenout, že čl. 2 bod a) směrnice definuje osobní údaje jako „veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné osobě (subjekt údajů); identifikovatelnou osobou se rozumí osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména s odkazem na identifikační číslo nebo na jeden či více zvláštních prvků její fyzické, fyziologické, psychické, ekonomické, kulturní nebo sociální identity“.

V tomto ohledu má obrazový záznam osoby povahu osobního údaje, jelikož ji jednoznačně identifikuje. Skupina zřízená podle článku 29 tak ve svém stanovisku 4/2007 k pojmu osobní údaje (WP 136) zdůrazňuje: „Obrazové záznamy jednotlivců zachycené systémem dohledu pomocí videokamer mohou být osobními údaji v té míře, do jaké je na nich tyto jednotlivce možné poznat“³.

Pokud jde o druhou otázku, to znamená existenci zpracování, je třeba připomenout, že písmeno b) článku 2 jej definuje jako „jakýkoli úkon nebo soubor úkonů s osobními údaji, které jsou prováděny pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromažďování, zaznamenávání, uspořádávání, uchovávání, přizpůsobování nebo pozměňování, vyhledávání, konzultace, použití, sdělení prostřednictvím přenosu, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, srovnání či kombinování, jakož i blokování, výmaz nebo likvidace“. Jedná se tedy o velice široký pojem, který zahrnuje shromažďování a pořizování obrazových záznamů osob.

Po určení, že pořizování obrazových záznamů představuje zpracování osobních údajů, je třeba přezkoumat, zda takový případ, jako je ten předložený, spadá pod výjimku stanovenou v čl. 3 odst. 2 směrnice 95/46/ES. Za tímto účelem je třeba vzít v úvahu různé případy, v nichž bylo uplatnění uvedené normy přezkoumáváno.

Jak zdůrazňuje předkládající soud, bod 12 odůvodnění směrnice 95/46/ES se omezuje na to, že ve druhé větě uvádí, že „je třeba vyloučit zpracování údajů

² – Rozsudek ze dne 8. listopadu 2007, ING AUER (C-251/06, Sb. rozh. s. I-9689, bod 38).

³ – Stanovisko 4/2007 k pojmu osobní údaje, přijaté dne 20. června 2007 (WP 136), s. 8.

fyzickou osobou při výkonu činností, které mají výlučně osobní povahu, jako je korespondence nebo vedení adresáře“. Navzdory své stručnosti zavádí citovaný text první kritérium vymezení výjimky, které Soudní dvůr zohlednil. V rozsudku Lindqvist je tak uvedeno následující:

„46. Pokud jde o výjimku upravenou v čl. 3 odst. 2 druhé odrážce směrnice 95/46, jsou ve dvanáctém bodě odůvodnění této směrnice, který se týká této výjimky, uvedeny jakožto příklady zpracování údajů prováděného fyzickou osobou pro výkon výlučně osobních či domácích činností, korespondence nebo vedení adresáře.

47. Tato výjimka tedy musí být vykládána tak, že se týká pouze činností v rámci soukromého nebo rodinného života jednotlivců, což zjevně neplatí pro zpracování osobních údajů, jež spočívá v jejich zveřejnění na internetu tak, že se zpřístupní neomezenému počtu osob.

48. Na třetí otázku je tedy třeba odpovědět tak, že se na takové zpracování osobních údajů, jaké je uvedeno v odpovědi na první otázku, nevztahuje žádná z výjimek obsažených v čl. 3 odst. 2 směrnice 95/46.“⁴

Je tak vymezen první prvek, který umožňuje přezkoumat dosah této normy, v rozsahu, v němž odkaz na „výlučně osobní či domácí činnosti“ je třeba chápat tak, že se týká „činností v rámci soukromého nebo rodinného života“.

Toto kritérium potvrdil Soudní dvůr znovu v rozsudku Satamedia⁵, jehož body 43 až 45 opakují odůvodnění uvedené v rozsudku Lindqvist. V tomto rozsudku se uvádí, že výjimka zjevně nezahrnuje činnosti společností Markkinapörssi a Satamedia, jejichž předmětem je seznámit se shromážděnými údaji neurčitý počet osob.

Z obou rozsudků vyplývá druhý prvek, který je třeba vzít v úvahu při určení rozsahu výjimky stanovené ve směrnici pro osobní či domácí činnosti nebo činnosti související se soukromým nebo rodinným životem osob. Tento prvek spočívá v tom, že pod výjimku nemohou spadat případy, kdy je se zpracovávanou informací seznámen „neomezený“ nebo „neurčitý“ počet osob.

Tyto závěry zohlednila skupina zřízená podle článku 29, konkrétně ve svém stanovisku 5/2009 k internetovým sociálním sítím, které analyzuje právní postavení uživatelů sociálních sítí a použitelnost směrnice na činnosti, které tito uživatelé provozují⁶. Tento dokument vychází z obecné zásady, že „ve většině případů se uživatelé považují za subjekty údajů“ a že „směrnice neukládá

⁴ – Rozsudek ze dne 6. listopadu 2003, Lindqvist (C-101/01, Sb. rozh. s. I-12971, body 46 až 48).

⁵ – Rozsudek ze dne 16. prosince 2008, Satakunnan Markkinapörssi a Satamedia (C-73/07, Sb. rozh. s. I-9831)

⁶ – Stanovisko 5/2009 k internetovým sociálním sítím, přijaté dne 12. června 2009 (WP 163, bod 3.1, s. 6 a 7).

povinnosti správce údajů fyzické osobě, která zpracovává osobní údaje pro výkon výlučně osobních či domácích činností“.

Nicméně pro účely projednávané věci je relevantní analýza skupiny, v níž k výše uvedenému závěru dodává, že „v některých případech se na činnosti uživatele SSS⁷ nemusí vztahovat výjimka pro domácí použití a lze mít za to, že uživatel přebírá určité odpovědnosti správce údajů“, a jako příklady uvádí tři konkrétní případy.

Zprv tak vyvstává otázka použitelnosti směrnice v závislosti na povaze a účelu zpracování prováděného uživatelem v případech, kdy jeho činnost může překročit výlučně osobní či domácí činnosti, přičemž stanovisko uvádí, že „pokud uživatel SSS jedná jménem společnosti či sdružení nebo používá SSS převážně jako platformu na podporu obchodních, politických nebo sociálních cílů, zmíněná výjimka neplatí. V tomto případě uživatel přebírá veškeré odpovědnosti správce údajů, který poskytuje osobní údaje jinému správci údajů (poskytovateli SSS) a třetím stranám (ostatní uživatelé SSS nebo případně další správci údajů s přístupem k těmto údajům).“

Zadruhé má skupina za to, že výjimka se neuplatní s ohledem na samotné nastavení přístupu k profilu uživatele, přičemž zmiňuje případy otevřených sociálních sítí nebo „lze-li tvrdit, že při přijetí kontaktů nebyl proveden skutečný výběr, tj. uživatelé akceptují ‚kontakty‘ bez ohledu na existující vztahy“, čímž uplatňuje kritérium podobné kritériu uvedenému Soudním dvorem ve výše zmiňovaných rozsudcích Lindqvist a Satamedia, přičemž má za to, že „v případě, že uživatel přijme informované rozhodnutí o rozšíření přístupu mimo ‚přátele‘ podle vlastního výběru, nabývají platnosti odpovědnosti správce údajů“, a bude tak platit „stejný právní režim jako v případě, kdy jakákoli osoba používá jiné technologické platformy ke zveřejnění osobních údajů na internetu“, podobně, jak vyplývá z uvedených rozsudků.

Nakonec skupina zmiňuje třetí případ, když má za to, že „uplatnění výjimky pro domácí použití je omezeno rovněž nutností zaručit práva třetích stran, zejména co se týká citlivých údajů“.

I když první dva uvedené případy pouze vyzdvihují případy vyplývající z výše uvedené právní úpravy a judikatury, třetí případ doplňuje nový faktor, který je třeba zohlednit při přezkumu použitelnosti výjimky pro domácí použití na zpracování konkrétních údajů: dopad, který může mít uvedené zpracování na práva třetích osob, která jsou podle čl. 1 odst. 1 směrnice 95/46/ES právě předmětem její ochrany.

Použitelnost pravidla obsaženého v druhé odrážce čl. 3 odst. 2 směrnice je tak spojena se zásadou proporcionality, kterou samotná směrnice zakotvuje ve svém textu, konkrétně v čl. 6 odst. 1 písm. c), jenž uvádí: „Členské státy stanoví, že

⁷ – Služby sociálních sítí

osobní údaje musejí být [...] přiměřené, podstatné a nepřesahující míru s ohledem na účely, pro které jsou shromažďovány a/nebo dále zpracovávány“. Proto je nutné v každém konkrétním případě posoudit, zda s ohledem na okolnosti může být potenciální zpracování údajů třetích osob přiměřené osobní či domácí činnosti, nebo, slovy Soudního dvora, „soukromé a rodinné“ činnosti osob, aniž přitom ohrožuje práva osob, jejichž údaje jsou předmětem zpracování, a zejména jejich právo na soukromí a právo na ochranu osobních údajů, zakotvená články 7 a 8 Listiny základních práv.

Ze všeho dosud uvedeného vyplývá, že při přezkumu, zda určité zpracování spadá pod výjimku stanovenou v druhé odrážce čl. 3 odst. 2 směrnice, je třeba zohlednit tři základní faktory:

zda zpracování souvisí s činnostmi v rámci soukromého nebo rodinného života osob;

zda údaje budou zpřístupněny neomezenému nebo neurčitému počtu adresátů; a

zda zpracování údajů nepoškozuje základní práva a svobody třetích osob.

Co se týče prvního z faktorů, existence právní úpravy ochrany osobních údajů nemá vést k zasahování do soukromých, rodinných nebo přátelských vztahů osob. Rozšířit její uplatňování na tyto oblasti soukromého života by mohlo znamenat pokřivení sociálních vztahů, které by podléhaly požadavkům naprosto neodpovídajícím těmto vztahům. Ochrana osobních údajů by neměla zasahovat do nejintimnější a nejosobnější sféry mezilidských vztahů.

Ovšem zároveň by měla existovat z tohoto vyloučení výjimka v těch případech, kdy by zpracování těchto údajů mohlo poškodit práva a zájmy osob, které by přinejmenším měly mít právo bránit se tomu, aby toto zpracování bylo prováděno. V této souvislosti je třeba mít na zřeteli, že využití informačních a komunikačních technologií může vést k tomu, že zpracování údajů původně související se soukromým životem toho, kdo jej provádí, může znamenat přístup k informacím o třetí osobě, o nichž si dotčený nepřeje, aby byly veřejné, jelikož by mohly narušit jeho soukromí nebo mu i způsobit škodu. Uplatnění vyloučení, které bylo zmíněno výše, by nemělo zahrnovat situace tohoto druhu.

Po stanovení těchto předpokladů je třeba zodpovědět položenou otázku, což znamená uplatnit na provedené zpracování faktory, které byly vyjmenovány výše. Jak bylo uvedeno, v projednávaném případě bylo shromažďování obrazových záznamů prováděno za účelem ochrany života a bezpečnosti osob, které se nacházejí v domě, v němž bydlí osoba, které český orgán pro ochranu osobních údajů uložil sankci, přičemž kamerový systém zabíral nejen vstup do uvedeného domu a bezprostřední okolí, ale rovněž veřejnou ulici v celé její šíři, a byly nahrávány i obrazové záznamy osob, které vstupovaly do domu na protější straně ulice, na níž se nacházel dům, o zajištění jehož bezpečnosti šlo.

Přístup k obrazovým záznamům měl pouze žalobce, s tím, že tyto záznamy mohou být, což skutečně byly, poskytnuty policii v případě zjištění jednání, které ohrožuje život, integritu nebo bezpečnost těch, kteří se nacházejí v domě.

Pokud jde o rozsah šíření obrazových záznamů, dotčené zpracování se podle všeho řídilo tím, že tyto záznamy nebyly poskytovány jiným třetím osobám než bezpečnostním silám v případě zjištění spáchání protiprávního aktu v domě žalobce, takže je třeba vycházet ze skutečnosti, že údaje nejsou zpřístupňovány neomezenému nebo neurčitému počtu osob, aniž je dotčeno to, že příjemce obrazových záznamů má postavení správce v souladu s definicemi stanovenými směrnicí, i když směrnice se na něj na základě výjimky stanovené v první odrážce čl. 3 odst. 2 nemusí vztahovat.

Problém však vyvstává v souvislosti se dvěma zbylými faktory, které je třeba zohlednit, vzhledem ke skutečnosti, že kamery zabíraly nejen dům správce a nevyhnutelně nutnou minimální část okolí, kterou lze považovat za přiléhající k domu, ale obrazové záznamy zahrnovaly i přiléhající veřejnou ulici a zachycovaly dokonce vstup do domu na protější straně ulice.

Kdyby bylo pořizování záznamů omezeno na interiér domu, bylo by možné mít za to, že získané údaje souvisejí se soukromým a rodinným životem osob, které jej obývají, a to nezávisle na tom, že by tyto záznamy byly použity za účelem ochrany bezpečnosti. V takovém případě by bylo třeba mít za to, že právo správce na ochranu jeho bezpečnosti ve spojení s omezením rozsahu pořizování záznamů na jeho vlastní domácnost v každém případě převažuje nad právy třetích osob, které by mohly do tohoto obydlí vniknout.

Nicméně pokud obrazové záznamy pokrývají oblasti, které jsou mimo hranice domu, o zajištění jehož bezpečnosti se jedná, je třeba mít za to, že zásah do soukromí osob, jejichž obrazový záznam kamery zachytí, je větší, a právo majitele domu nemusí být nutně považováno za převažující. To znamená, že pokud pořizování záznamů není omezeno na soukromý a rodinný rámec toho, kdo je za nahrávání odpovědný, nabývá větší důležitosti to, aby práva třetích osob nemohla být v důsledku pořizování záznamů poškozena, obzvláště s ohledem na to, že tyto osoby nejsou nijak informovány o tom, že jejich obrazové záznamy jsou nahrávány, a že tyto třetí osoby nemají zpravidla vztah k majiteli sledovaného domu.

V tomto ohledu nabývá zvláštního významu zásada proporcionality zakotvená v čl. 6 odst. 1 písm. c) směrnice, neboť zásah je třeba považovat za tím větší, čím méně souvisí pořízený obrazový záznam s účelem ochrany domu; to znamená, že údaje v takovém případě již nebudou přiměřené, podstatné a nepřesahující míru s ohledem na sledované účely, přičemž pořizování záznamů jde nad rámec výjimky podle čl. 3 odst. 2 směrnice a je nutné, aby zodpovědná osoba splňovala požadavky, které tato směrnice ukládá kterémukoliv správci.

V případě, který je předmětem předběžné otázky, kamera zachycuje nejenom část veřejné ulice, která je nezbytně nutná nebo minimální k ochraně vstupu do domu, ale zachycuje ji v plné šíři, přinejmenším k domu nacházejícímu se naproti dotčenému domu. V tomto případě je třeba zpracování považovat za nepřiměřené sledovanému účelu, přičemž je třeba přihlížet obzvláště k právům třetích osob, jejichž obrazové záznamy jsou pořizovány, jelikož jejich počet exponenciálně roste a ve stejném poměru klesá vztah uvedených osob k předmětu dohledu pomocí videokamer.

Proto je třeba učinit závěr, že výjimka pro domácí použití stanovená směrnicí by se uplatnila v případech, kdy by oblast pořizování obrazových záznamů byla omezena na samotný dům, o zajištění jehož bezpečnosti se jedná, nebo nanejvýše na minimální část veřejné cesty nezbytně nutnou k ochraně přístupu k uvedenému domu.

ODPOVĚĎ NA PŘEDBĚŽNOU OTÁZKU

Vzhledem ke všem výše uvedeným argumentům Španělské království navrhuje Soudnímu dvoru, aby na předběžnou otázku odpověděl takto:

Provozování kamerového systému umístěného na rodinném domě za účelem ochrany majetku, zdraví a života majitelů domu lze podřadit pod zpracování osobních údajů „prováděné fyzickou osobou pro výkon výlučně osobních či domácích činností“ ve smyslu čl. 3 odst. 2 směrnice 95/46/ES, pokud je nahrávaná oblast omezena na samotný rodinný dům nebo na minimální veřejné prostory nezbytně nutné k ochraně přístupu k domu, a to i pokud obrazové záznamy mohou být v případě zjištění ohrožení života, bezpečnosti nebo zdraví majitelů předány bezpečnostním silám.

V Madridu dne 26. července 2013

ZMOCNĚNĚC ŠPANĚLSKÉHO KRÁLOVSTVÍ

[podpis]

Alejandro Rubio González

